

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente**

**Repositorio Institucional del ITESO**

**rei.iteso.mx**

---

Publicaciones ITESO

PI - Revista Análisis Plural

---

1999-03-03

# La intolerancia en el ejercicio de la política

Méndez-Sánchez, Leonardo

---

Méndez-Sánchez, L. (1999). "La intolerancia en el ejercicio de la política". En Análisis Plural, segundo semestre de 1998. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.

Enlace directo al documento: <http://hdl.handle.net/11117/1130>

*Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:*  
<http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf>

*(El documento empieza en la siguiente página)*

## **II. ANÁLISIS POLÍTICO**

### **LA INTOLERANCIA EN EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA**

*Leonardo Méndez Sánchez*

Cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en sus viajes al extranjero, sostiene sin más que en México se vive en un estado democrático, se podría pensar que hemos superado los vicios y trampas electorales que permitieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenerse en el poder hasta la fecha, lo cual no es del todo cierto. Aunque sabemos que se han reformado las leyes electorales, y que incluso el Instituto Federal Electoral ya es un organismo autónomo del control del ejecutivo, aún existen lagunas en los procesos electorales que impiden un clima electoral cabal, sobre todo en lo que se refiere a los medios de comunicación masiva, fundamentales en los procesos electorales. Pero más allá de la legislación electoral, el país no vive todavía en un régimen democrático pues, entre otras carencias, no es la tolerancia y el respeto al adversario político, las virtudes que rigen nuestras relaciones políticas.

Ésta es precisamente la tónica desde la cual se puede leer el segundo semestre de 1988: la intolerancia en las relaciones políticas, la cerrazón ante la crítica y la disidencia, la descalificación del adversario político, o del alternante, como le consta al todavía presidente de la Cruz Roja Mexicana.

#### **1. La intolerancia, respuesta a las demandas indígenas y a la organización de la sociedad civil**

Para recordar las causas por las cuales el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decidió no dialogar más con los representantes del gobierno mexicano, hay que ubicar que: 1) los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas se firmaron el 16 de

febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar; 2) la actitud de los representantes gubernamentales en la mesa de discusión de los asuntos políticos fue la de no participar activamente en los diálogos; 3) en los meses posteriores a la firma de los primeros acuerdos no hubo intento alguno por formalizarlos, por lo cual el EZLN decidió no dialogar más hasta que el gobierno no asumiera una actitud responsable por lo que ya había firmado; 4) en noviembre de 1996 tanto el Ejército Zapatista como la Secretaría de Gobernación estuvieron de acuerdo con que la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) redactara un proyecto de ley que sólo podría ser aceptado o rechazado, pero no corregido, y finalmente 5) el exsecretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, aceptó dicho documento, pero el presidente Zedillo pidió que se corrigiera, sobre todo en lo que respecta al rubro de la autonomía indígena.

Desde entonces se ha suspendido el diálogo; y por su parte el gobierno acusa al Ejército Zapatista de que es su intolerancia, su apuesta al todo o nada, lo que ha impedido avanzar en las negociaciones. La acusación no es del todo correcta. El valor que se le da a la palabra y al compromiso en la cultura indígena es muy diferente del que acostumbramos manejar (no se están negociando prebendas y espacios de poder con contrincantes políticos o partidos de oposición, tampoco se trata de ceder negocios a cambio de recursos financieros y humanos para las campañas políticas), por lo que la acusación del todo o nada debe acotarse: es todo o nada de los Acuerdos de San Andrés, y no hay a quién comprar o prometer nada. Es un sentido de compromiso político que desconocemos, o que ya se nos olvidó.

En el conflicto en Chiapas se enfrentan dos formas distintas de entender las relaciones sociales, la acción política y, fundamentalmente, el sentido de la justicia social, del bien común y de la acción del gobernante.

A pesar de que no hay diálogo con el gobierno, en la zona de conflicto los indígenas han seguido organizándose para lograr mejores condiciones de vida, para aprovechar mejor los recursos naturales pero, sobre todo, para poder establecer relaciones comerciales sin intermediarios (que en la región se conocen como coyotes). Con este objetivo se han ido creando los municipios

autónomos, que han sido excesivamente reprimidos por el gobernador interino, a través del Ejército Mexicano, y los policías de seguridad pública del estado, principalmente. Recordemos que para disolver la cabecera municipal del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en Taniperla, Ocosingo, Chiapas, en la cañada del Río Perla (una comunidad de no más de 1 500 habitantes, contando mujeres, niños y hombres) enviaron a cerca de 960 efectivos militares y policías, además de los soldados del campamento militar que ahí se encontraban.

Mientras tanto, el presidente Zedillo ha visitado en varias ocasiones el estado de Chiapas, pronunciando discursos agresivos para quienes piensan diferente. Desde esta belicosidad verbal pudo menoscabar el sentido de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), que presidía el señor obispo Samuel Ruiz, hasta hacer que la propia mediación declarara su disolución. No más.

Dentro de las acciones más relevantes de este semestre en la zona de conflicto, destacan los siguientes acontecimientos.

1) La denuncia del senador del PRI y miembro de la cocopa, Pablo Salazar Mendiguchía. Justamente el 1o. de julio, en el "Perfil político" de *La Jornada*, el senador del PRI, Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la COCOPA, publica un documento que desde su título es revelador: "El fracaso de una imprudente estrategia gubernamental para Chiapas". Poco después de las 9:30 horas del mismo día, en el municipio de Simojovel, en Chiapas, el presidente Zedillo responde con un discurso verdaderamente agresivo, en el cual defiende su política en Chiapas, y descalifica a todos los que no comparten su punto de vista. Para muchos, este discurso fue dirigido contra el EZLN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido de Acción Nacional (PAN), inclusive, y por supuesto contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas y su titular el obispo Samuel Ruiz. Es probable que haya sido así, pero no se puede perder de vista el documento del senador Salazar, porque su contenido difiere notablemente de la política oficial, por las denuncias que en él se hacen, y por la exigencia de proponer una estrategia gubernamental que verdaderamente se dirija a resolver los problemas de la región.

Analicemos brevemente el documento:

## a) En cuanto a las denuncias:

- ♦ En enero de 1998, el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, habla de una nueva estrategia para resolver el conflicto en Chiapas, sin hacer un balance de los acciones anteriores.
- ♦ Hay una sistemática descalificación al trabajo de la COCOPA.
- ♦ Es insuficiente la ayuda a los desplazados que han abandonado sus comunidades por temor a la represión de los grupos paramilitares, y de los disidentes del neozapatismo que suelen denominarse priístas.
- ♦ Entre las acciones incongruentes, se indica que el Instituto Nacional de Migración anuncia, el 12 de febrero, que expulsará a todos los extranjeros en Chiapas.
- ♦ Dentro de este marco de hostigamiento, el 26 de febrero expulsan al párroco de Chenalhó de origen francés.
- ♦ El senador considera un hecho sumamente grave que el 14 de marzo el presidente Zedillo firme una propuesta de reformas constitucionales en materia indígena, en un acto contrario a los Acuerdos de San Andrés, y desconociendo los compromisos políticos contraídos con la COCOPA y el EZLN.
- ♦ Dentro de esta línea de agresión, y buscando retomar la iniciativa que se le había cedido al EZLN, el 18 de marzo se acusa a la CONAI de ser parcial.
- ♦ El 22 de marzo se acusa a la CONAI de abrir el espacio a la intervención extranjera.
- ♦ El 11 de abril irrumpe en Taniperla, Ocosingo, Chiapas, un grupo de policías y soldados, en medio centenar de vehículos (en una comunidad que no tiene más de cinco pequeñas camionetas de carga), para dismantelar el municipio autónomo Ricardo Flores Magón. Detienen a 11 indígenas, dos observadores nacionales y 12 observadores extranjeros, quienes un día después serán expulsados del país (a pesar de que se consiguió un amparo, no hubo en la oficina de Migración quien lo recibiera para hacerlo efectivo).
- ♦ El 15 de abril, en el diario venezolano *El Nacional*, el presidente Zedillo declara que el principal grupo paramilitar es el EZLN.



- El 29 de abril, y aludiendo a la CONAI, pide que en un acto de honestidad intelectual dé a conocer la agenda política que esconde en su intervención en el conflicto en Chiapas.
- El 1o. de mayo el gobierno federal disuelve el municipio autónomo Tierra y Libertad y se detiene a casi medio centenar de indígenas.
- El 11 de mayo se aplica el artículo 33 constitucional contra un grupo numeroso de observadores italianos.
- El 29 de mayo el gobierno federal pide a "... esos que creen que (la) teología de la liberación justifica la violencia... que rectifiquen, que si tienen, o piensan que tienen una buena misión que cumplir en la tierra, que la cumplan a través de la ley".
- El 3 de junio en el municipio de Nicolás Ruiz ejecutan órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la comunidad.
- El 7 de junio la CONAI renuncia a su tarea de mediación.
- El 10 de junio, en un operativo en las comunidades de Chavajeval, Unión Progreso y la cabecera de El Bosque, las fuerzas de seguridad matan por lo menos a 10 personas, y hieren a muchos más. Detienen a medio centenar de indígenas, violando los derechos humanos, arrestan a ancianos y ancianas, maltratan a mujeres y niños, saquean casas, cortan el suministro del agua, roban pertenencias y alimentos, y vejaron y humillaron a los pobladores de esas comunidades. La masacre de El Bosque es un hecho grave porque fue un operativo planeado, preparado y ejecutado por funcionarios gubernamentales.

b) En lo que toca a la estrategia gubernamental, ésta se puede resumir en cinco puntos: 1) desarme de grupos y esclarecimiento de la matanza de Acteal, 2) seguridad y vigencia del estado de derecho, 3) incorporación de las autoridades chiapanecas al proceso de pacificación, 4) reordenamiento de la geografía política estatal, y 5) retribución gubernamental a las comunidades por los daños ocasionados a desplazados y víctimas.

El senador Salazar señala que pareciera tratarse de un plan para una situación distinta de la de Chiapas, pues en ningún momento se plantea la reanudación del diálogo con el EZLN. Cuando se habla de nuevas inversiones millonarias, se olvidan de que a mediados de 1993 se descubrió la guerrilla en Chiapas, y que se pretendió resolver

el problema destinando más dinero y recursos para el Programa Nacional de Solidaridad. En su apreciación, el problema es económico-social, pero tiene ante todo una dimensión política.

La situación actual, dice el senador, es peor a la de diciembre de 1997: hay más muertos, campamentos militares y policiacos, desalojos, extranjeros expulsados, indígenas como base de apoyo y promotores de derechos humanos detenidos, y comunidades divididas. Los efectos de la estrategia política en la opinión pública ha provocado su polarización; hay cada vez más discursos beligerantes, comunidades humilladas e indígenas irritados. No se han desarmado los grupos paramilitares, y no se ha resuelto la matanza de Acteal.

c) *Por lo que respecta a la propuesta presentamos una cita textual, tomada de la parte final del documento del senador Pablo Salazar:*

1. El cumplimiento cabal de los Acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena.
2. La aprobación de una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena que sea la fiel interpretación de los Acuerdos de San Andrés.
3. La revisión, tanto de las posiciones como de las facultades jurídicas del Ejército en Chiapas, como un paso para restaurar la confianza en una solución pacífica al conflicto.
4. Desarmar a los grupos paramilitares.
5. Poner en libertad a todos los presos de conciencia, y
6. Poner fin a la violencia del Estado y generar las condiciones para, con absoluto respeto a los derechos humanos, frenar la violencia e impunidad de particulares.

El gobierno federal está obligado a dar el primer paso.<sup>1</sup>

Como ya habíamos indicado, el mismo día de la publicación, en Simojovel, Chiapas, el presidente Zedillo pronunció un discurso provocador e intolerante. Si bien se puede leer como una respuesta al documento de uno de los senadores de su partido, confirmó la percepción que sostuvo su autor, pues en su respuesta Zedillo dice

---

1. "Perfil político", en La Jornada, miércoles 1° de julio de 1998.

que él no tiene un doble lenguaje, como lo hacen quienes alientan la injerencia externa en el conflicto (hay un intento evidente de reducirlo a un nivel meramente local), en clara alusión a la CONAI, y sostiene que “se dijeron mediadores y faltaron en esa tarea por anteponer su parcialidad y sus intereses de grupo”; esta misma alusión podría aplicarse a la COCOPA. No abre la posibilidad de retirar al ejército en Chiapas, pues considera que su presencia permite evitar enfrentamientos. Sostiene que no tolerará a grupos paramilitares de ningún signo. Piensa que en el conflicto todos deben ceder para que todos ganen. Los mediadores, señala, fallaron por ser parciales.

Dentro de su discurso hay una grave acusación: dice que el EZLN contribuyó a precipitar la crisis financiera de 1994, aunque después, el 2 de septiembre, el secretario de Gobernación sostiene que el papel del EZLN es irrelevante.

La reacción no se hizo esperar: el PRD declara que el presidente Zedillo es un obstáculo para la paz en Chiapas. Un diputado del PAN censuró la “violencia discursiva” del presidente Zedillo, e indicó que el ejecutivo ya no sabe a quién culpar. Javier Elorriaga, integrante del EZLN, considera que este tipo de declaraciones impulsan la guerra. El 10 de julio, cinco premios Nobel (Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Oscar Arias, Desmond Tutu, y el Dalai Lama), así como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entregaron un reconocimiento al obispo Samuel Ruiz y a los miembros de la CONAI, por su trabajo en favor de la paz, a cuatro años y medio del alzamiento indígena en Chiapas.

El 16 de julio Marcos rompe el silencio con dos comunicados, en uno de ellos solamente dice “Yepa, ándale, arriba”. En otro, escrito en lengua náhuatl, dice: “¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Aquí sigue vuestro padre, aún no ha muerto! ¡Zapata vive!”. Al día siguiente hay nuevos comunicados, en los cuales el EZLN considera que la confianza en el gobierno está hecha añicos. Y pregunta: “Si no se dialoga para lograr y cumplir acuerdos, ¿para qué se dialoga?”, a lo que Rabasa, el coordinador para el diálogo, responde: “Para resolver pacíficamente el conflicto”. Las víctimas de la estrategia oficial son la paz, la soberanía, la democracia, la sociedad civil, la CONAI y la COCOPA. Uno es el ejército que ataca y otro el que apaga incendios y muere en la lucha contra el crimen, sostiene Marcos.



El 21 de julio el EZLN dice que la iniciativa de la COCOPA debe ser analizada en una consulta nacional, para saber si la nación la sostiene: “Es hora de los pueblos indios, de la sociedad civil y del Congreso de la Unión”, para lanzar la V Declaración de la Selva Lacandona. Convoca a una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena de la COCOPA, derivada de los Acuerdos de San Andrés. “Es hora del Congreso para que legisle acatando el principio de mandar obedeciendo. Es el tiempo de la paz”, sostiene.

Labastida responde que el gobierno no es rehén de Marcos (lo llamó Sebastián Guillén) ni de nadie. La COCOPA sostiene que el gobierno debe mostrar una voluntad real de diálogo.

**2)** Entregan indemnizaciones a los familiares de las víctimas de Acteal: por 45 muertos (18 mujeres, 7 hombres mayores de 18 años, 16 niñas y cuatro varones menores de edad, así como tres mujeres embarazadas) y 21 heridos se indemniza con 2 320 000 pesos. Por cada muerto el gobierno entregó al Fondo de Indemnización de Acteal, 35 000 pesos (en Aguas Blancas, Guerrero fueron 45 000 pesos por muerto) y 25 000, 15 000 y 10 000 por cada herido, según sea la gravedad de las lesiones.

Al entregar su informe anual de gobierno, el gobernador interino de Chiapas dice que está dispuesto a otorgar amnistía a todos los grupos armados de la entidad que gobierna, incluyendo al EZLN, reconociendo implícitamente la existencia de grupos paramilitares que de manera sistemática han negado él mismo y la Secretaría de Gobernación.

En este marco se puede entender la visita que Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a México el 22 de julio.

Kofi Annan pide al EZLN que se resuelva el conflicto de manera pacífica. La situación requiere diálogo honesto, declaró, al tiempo que elogió el aporte mexicano para resolver los conflictos en otros países. La declaración fue muy cuidadosa: se dirigió al Ejército Zapatista, pero las condiciones que establece implican también a la contraparte del gobierno de Zedillo.

El 29 de julio, paramilitares retienen a dos oficiales del Pentágono. La sargento Elizabeth Krug y el agregado militar Thomas Gillen fueron

detenidos durante cuatro horas y media por miembros de un grupo paramilitar organizado por el PRI, en la comunidad de Los Plátanos, indicó un vocero del Pentágono. Sobre la presencia de los estadounidenses, señaló que realizaban tareas normales de recaudación de informes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pide prudencia y sensatez a diplomáticos de Estados Unidos para evitar incidentes como el sucedido en Los Plátanos. Anuncia que dará protección si se les avisa previamente de sus viajes. El 1o. de agosto se da a conocer que personal de la embajada de Estados Unidos ha realizado más de nueve viajes a Chiapas en el último año. La SRE dice que son libres de enviar información a Estados Unidos.

**3) El diálogo con la sociedad civil y la COCOPA.** El 4 de septiembre la sociedad civil convoca al EZLN a un diálogo. El 11 del mismo mes responde afirmativamente el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), pues considera que la paz se ha de construir desde abajo. Se propone que el diálogo se lleve a cabo del 20 al 22 de noviembre del año en curso, en San Cristóbal de las Casas. En el mismo encuentro el EZLN acepta reunirse con la COCOPA los días 20 y 22 en el mismo lugar. El diálogo con la sociedad civil no tuvo contratiempos, en cambio el encuentro con la COCOPA tuvo algunos incidentes.

El primero de ellos se suscitó porque, al parecer, el local donde se hospedaría la delegación zapatista no contaba con las condiciones necesarias para alojarlos. En respuesta, los comandantes del EZLN acusan a los miembros de la COCOPA de ser racistas porque consideran humillante estas carencias. La COCOPA responde también con severidad negando las acusaciones, sobre todo las de racismo.

Al respecto cabe hacer un comentario sobre la reacción de los indígenas zapatistas. Es totalmente cierto que el hecho de que faltaran camas y que no tuvieran los medios de comunicación solicitados así como los alimentos necesarios, no debía ser un problema mayor que no pudiera ser solucionado fácilmente, pero siempre y cuando no se tratase de un grupo que representa a aquellos que han sido oprimidos y sometidos por siglos, o que han vivido las consecuencias de la "guerra de baja intensidad" que los militares estadounidenses

han diseñado como estrategia para eliminar la base social de una guerrilla, sin la cual no tienen ninguna posibilidad de éxito.

El senador Carlos Payán reflexiona acerca de la posibilidad de retirarse de la COCOPA, y considera que Marcos deberá responder de manera sensata a este incidente. A pesar de esto, la COCOPA está dispuesta a reunirse con los zapatistas el día 22, siempre y cuando se asuma una actitud madura y responsable. El encuentro fue un éxito a pesar de que la COCOPA pretendió hacer llegar una propuesta de diálogo que Alan Arias, de la Secretaría de Gobernación, les había entregado. Los zapatistas no la reciben porque no reconoce a la COCOPA como instancia de mediación, y reiteran que el diálogo con el gobierno se dará si se cumplen las condiciones mínimas a conocidas, entre las que destaca cumplir los acuerdos de San Andrés.

El diálogo con la sociedad civil es fructífero. Se reúnen 3 000 integrantes de la sociedad civil de toda la República Mexicana (a pesar de que el secretario de Gobernación los descalifica al señalar que no representan a nadie, mucho menos a 90 millones de mexicanos) y hay observadores extranjeros de 18 países. Acuerdan realizar la consulta que se anunció en la V Declaración de la Selva Lacandona, sobre la ley de derechos y cultura indígena.

## **2. La intolerancia ante la opinión que difiere del proyecto modernizador del Estado**

### *2.1 Intolerancia en la palabra*

En la palabra hay significados y compromisos. Por la palabra se expresa la manera como nos relacionamos con el mundo, como lo comprendemos, explicamos o interpretamos. La palabra implica también nuestro compromiso con el significado de la expresión. El discurso político expresa también las dimensiones que hemos mencionado. Lamentablemente, no es usual que los funcionarios públicos expresen por medio de la palabra su manera de entender las cosas ni consideren como una parte sustantiva de sus opiniones, el compromiso con lo declarado, a pesar de los efectos que pudieran llegar a tener sus afirmaciones. No es el objetivo de estas líneas hacer un análisis de la ética del discurso político, que bien nos haría

falta, sino simplemente apuntar hacia las consecuencias del discurso, y el compromiso que éste implica.

En el apartado anterior se insistió en la consecuencia negativa del discurso político que se dedica a descalificar a quien piensa de manera diferente.

El compromiso político de la palabra supone también valorar los efectos que pudiera llegar a tener el asumir la responsabilidad que corresponda, así como cuidar del prestigio y reconocimiento de quienes piensan o actúan de manera diferente. En otras palabras, supone la virtud necesaria de la tolerancia. Pero la tolerancia supone un diálogo, y en él la posibilidad de la discrepancia y el desacuerdo; esto es lo que nos enriquece como personas.

Lamentablemente, los tres últimos presidentes de México, desde Miguel de La Madrid a la fecha, han ido cerrando la posibilidad de dialogar con los adversarios. Carlos Salinas ni los oía, ni los veía. Ernesto Zedillo simplemente los anula; un ejemplo de ello es el caso reciente en el que sus declaraciones, en el sentido de que no veía el apoyo de la sociedad civil, y de la Cruz Roja en particular, a los damnificados por las lluvias en la costa de Chiapas, desencadenaron el cuestionamiento a la labor del presidente de la Cruz Roja Mexicana, que lo llevó a renunciar anticipadamente a su cargo. Este comentario suscitó que la misma sociedad civil le respondiera que, si bien no cuenta con los medios de transporte o los recursos del gobierno federal, y mucho menos con la cobertura informativa de la Presidencia de la República, no significa que no estuviera apoyando a los damnificados.

## *2.2 La intolerancia en el silencio*

El silencio es también una forma de expresión y, al igual que la palabra, supone un compromiso. No pronunciarse es una forma de dar a conocer lo que se piensa. Pero el silencio es más contundente que la palabra, y tiene tantos significados como el interlocutor, que espera una respuesta, pueda o quiera darle. Desde esta perspectiva, el silencio puede tener mayores consecuencias que la palabra.

El silencio del Comité Clandestino Revolucionario Indígena ante el discurso de Zedillo tuvo el efecto esperado pues —acostumbrados



desde el poder a manipular las condiciones y los momentos del diálogo, a negociar los acuerdos (esto es ceder aun en lo que por justicia se reclama o se ha obtenido), a ofrecer cotos de poder a cambio de someter las demandas ciudadanas— hizo que el propio presidente Zedillo, el secretario de Gobernación, el coordinador del diálogo, los jerarcas de la Iglesia católica, empresarios y algunos políticos de la oposición, reclamaran la necesidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de escuchar a los indígenas sin intermediarios. Es justamente lo que el EZLN consideró que no estaba ocurriendo y por lo cual decidió no sentarse a dialogar más, hasta que las condiciones se modificaran.

Se podría pensar que el silencio es el resultado de la indiferencia o del olvido. Al referirnos al silencio de los políticos sobre asuntos que son de su incumbencia, la indiferencia o el olvido adquieren un mayor compromiso y significado; entre otras explicaciones, el olvido podría apuntar hacia una situación que ellos quisieran que no existiera, y la indiferencia podría hablar del poco valor o aprecio que tienen sobre un asunto, con relación a otros de los que sí hay consideraciones explícitas.

Tal vez ésta sería una forma de explicar la omisión sobre el conflicto en Chiapas en el mensaje que dirigió el presidente Zedillo a la nación, el 10. de septiembre del año en curso, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, o sobre el silencio en la conmemoración de los 30 años del movimiento estudiantil del 68, y de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Podemos suponer que el silencio del presidente Zedillo ante el dolor y la muerte no resulta ni de la indiferencia, ni del olvido, y podría significar, tal vez, la incomodidad que le provoca saber que Chiapas y Tlatelolco forman parte de esa historia que desearía ya se hubiera superado.

### **3. El Fobaproa, de la ilegalidad a la ilegitimidad**

A pesar de que el presidente Ernesto Zedillo ha sido cuidadoso con el aspecto legal de los procesos electorales, como se apuntó al inicio del análisis político, no lo fue en el caso del Fobaproa, tal y como ya se analiza en el capítulo de economía de este número del *Análisis de la Realidad Mexicana*.



En el momento de escribir estas líneas aún no conocemos por escrito si el PRI y el PAN llegaron a un acuerdo, pero tenemos una certeza: antes de cualquier decisión, es necesario legalizar los adeudos del Fobaproa, pues se firmaron los pagarés sin la debida autorización del poder legislativo. Pero si bien este aspecto puede corregirse modificando el carácter de los adeudos y los documentos que los avalen, no hay ninguna seguridad, ni siquiera al interior de los partidos firmantes de este acuerdo, de la legitimidad de esta acción política.

El debate en torno al Fobaproa tiene una doble dimensión: es una discusión técnica, y es también un asunto político. Para comprender adecuadamente el aspecto político es importante hacer un breve recuento de los acontecimientos.

Cuando se da a conocer el monto de los recursos del Fobaproa, poco más de 552 000 millones de pesos,<sup>2</sup> la postura de los principales partidos de oposición es diferente. El PRI, siempre bajo consigna, decide apoyar la propuesta del ejecutivo, si acaso se preocupa porque se vendan los bienes, recuperar el seguro de riesgo y proteger a los usuarios de los bancos.

El PAN propone crear un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios de México, un programa para proteger a los pequeños deudores, hacer auditoría al Fondo para castigar a los responsables, hacer reformas legales para evitar incumplimientos fraudulentos, y sanear el sistema bancario.

Por su parte, el PRD propone rechazar la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública, analizar la situación de los grandes deudores, establecer reglas para rescatar empresas productivas, proteger a las familias mediante subsidios y eliminar intereses. Propone también que se excluyan las operaciones de pasivos provenientes de operaciones ilícitas, irregulares o de mala fe, un programa para proteger a pequeños y medianos deudores, asegurar que los causantes del descalabro bancario paguen la responsabilidad civil, administrativa y política que les corresponde, reducir el costo

---

2. Para una mayor precisión ver el número anterior del *Análisis de la Realidad Mexicana*, en el capítulo de economía.

Técnicamente, los partidos de oposición propusieron salidas legales al problema que se había generado, pero buscando: primero, pagar solamente los pasivos que no fueran producto de acciones fraudulentas o irresponsables; segundo, realizar auditorías para conocer exactamente el tipo de operaciones y el monto de las mismas; tercero, hacer reformas para castigar a los culpables, y cuarto, elaborar programas para proteger a los pequeños y medianos deudores.

Políticamente la situación se fue complicando. Las primeras discusiones fueron para exigir al ejecutivo información para poder auditar el Fondo. No fue posible establecer negociaciones entre el PAN y el PRD. Y cuando parecía que se podría avanzar con la propuesta del presidente Zedillo, el PRD dio a conocer listas con los nombres de personas, empresas y grupos empresariales beneficiados con el Fobaproa, y se pudo constatar que muchos de estos nombres correspondían a personas ligadas en una u otra forma con el gobierno federal, con algunos gobiernos estatales, Tabasco, por ejemplo, y con personajes que de alguna manera financiaron campañas priístas para la gubernatura de ese estado y la misma campaña presidencial.

La primera reacción fue, entonces, negar la validez de los datos. Pero el PRD sostuvo que las listas eran fidedignas; posteriormente se sabría que un funcionario del propio Fondo fue quien las proporcionó.

En este momento las campañas en favor, por parte de la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, y en contra, por parte del PRD están en su apogeo. Casualmente, y con menos recursos, el PRD tuvo una mayor penetración, y se creó el sentir generalizado de que en el Fobaproa se cometieron fraudes, que había políticos involucrados, y que parte del dinero se había destinado a financiar al PRI. En estas condiciones la propuesta oficial prácticamente fue retirada (ya palmó, diría el diputado Porfirio Muñoz Ledo), provocando la reacción del secretario José Angel Gurría: "El PRD quiere hacer un circo" (expresión que repetiría en noviembre en la misma Cámara de Diputados).

Desde el inicio de esta polémica se discutió sobre el secreto bancario, argumento por el cual el gobierno sostenía que no podía dar información. Pero las mismas leyes señalan que en caso de interés general es posible divulgar los nombres de los inversionistas,

y en este caso eran deudores públicos, según la iniciativa de ley propuesta por el ejecutivo. Una vez más las declaraciones del secretario de Gobernación oscurecían el ambiente; el 5 de agosto sostuvo que exigir datos del Fobaproa era una trampa perredista. Un día después el gobierno acepta dar información a los auditores.

Pero el PRD no disminuía su campaña para lograr, mediante una consulta nacional, que la ciudadanía se pronunciara al respecto. El gobierno y articulistas como Héctor Aguilar Camín insistían en que el PRD grita más que explica, e inquieta más que convence, y que no ofrece soluciones constructivas. La propuesta de este partido ya se resumió; y si bien la actitud fue de un rechazo absoluto, lo cierto es que muy probablemente, sin este señalamiento público, no se hubiera llegado a una discusión a fondo de este problema, ni a estos niveles de información y discusión. Es probable que la posición del mismo PAN no hubiera sido la misma sin el nivel de la denuncia del PRD. Como lo dijo Julio Hernández en su columna de *La Jornada*: "El PRD puso la discusión en la conciencia pública".

El 31 de agosto se da a conocer que en la consulta sobre el Fobaproa participaron más de 3 millones de personas. Para tener un dato con qué comparar, en la consulta sobre el conflicto en Chiapas se había logrado un millón de votantes. Las preguntas sobre el Fobaproa conducían a rechazarlo, por lo cual el 95 % de los votos fueron en contra de la propuesta del gobierno. Reiteramos, lo destacable es que el PRD convocó a 3 millones de personas.

Es muy probable que prospere la propuesta del PRI y del PAN, si es que el intento panista de pedir la renuncia de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, como una condición para apoyar el acuerdo pactado con el ejecutivo, no conduce a un rompimiento definitivo. De ser así, habrá asuntos que queden pendientes, sobre todo, castigar a quienes realizaron operaciones fraudulentas (el PAN dice que primero hay que legalizar el Fondo, para luego castigar a los culpables), encontrar la forma de hacer que los políticos beneficiados regresen el dinero y sean igualmente castigados, y llegar al fondo del origen del financiamiento al PRI.

El silencio ante estas interrogantes, solamente delata y solapa, y por mucho que molesten las preguntas a los secretarios del gabinete, y probablemente al propio presidente Zedillo, el pueblo exige

respuestas completas. Esto es parte de una sociedad que se pretende verdaderamente democrática.

#### **4. Las palabras ofensivas del Partido de la Revolución Democrática**

Una vez más, la dirigencia del PRD solicitó una entrevista al presidente Zedillo para tratar asuntos del interés de la nación. La respuesta la dio el secretario de Gobernación, quien señaló ser la instancia adecuada para tratar esos asuntos. El PRD decidió enviar a una delegación a entrevistarse con Labastida Ochoa, para mostrarle la agenda propuesta para el encuentro con el presidente de la República. Después de la entrevista, el subsecretario Jorge Alcocer consideró que la agenda estaba plagada de palabras ofensivas, adjetivos que no se justificaban y, sobre todo, de mentiras. Es curiosa la manera de entender la democracia por parte del poder ejecutivo, tal como se expresa al inicio de este análisis: el que no piensa igual, de entrada no tiene la razón; es más, ni siquiera vale la pena escucharlo, a pesar de ser el PRD, en este momento, la segunda fuerza política del país.

Para cerrar esta sección, y pretendiendo justificar la hipótesis central, que considera que nuestra opción democrática está marcada por la intolerancia del grupo gobernante, resumiremos algunos de los párrafos de la agenda que propuso el PRD<sup>3</sup>:

1. Reorientación del paquete económico de 1999, evitando sufragar el rescate bancario. Evitar la corrupción y los programas dirigidos a garantizarle al PRI triunfos electorales. Fijar como prioridad la recuperación del salario, el crecimiento del empleo, del gasto social, la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de la planta productiva.
2. Autonomía de los programas contra la pobreza, debido a que el modelo vigente la ha multiplicado. Los programas asistenciales se han convertido en poderosos instrumentos de control político

---

3. Publicado en *La Jornada*, sábado 5 de diciembre de 1988, p. 7.



del gobierno y su partido. Es mejor impulsar actividades productivas, crear empleos y satisfacer las necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda.

3. Plan de austeridad republicana. Proponen una nueva ética pública de austeridad. Reducir gastos superfluos, esclarecer fraudes e ilícitos y castigar a los culpables. Implica recortar el gasto militar, reorganizar y fusionar dependencias, reducir sueldos de la alta burocracia y eliminar dispendios de funcionarios. Evitar que el dinero destinado a los gobiernos estatales fortalezca cacicazgos regionales.
4. Programa de apoyo a pequeños deudores. En lugar del dinero destinado al Fobaproa, crear un fondo para el desarrollo social, y otro para un programa de apoyo a pequeños deudores.
5. Legislación anticorrupción, creación de contralorías ciudadanas en todos los niveles e instancias del gobierno. La corrupción no sólo es un asunto de moral pública, sino también impide el desenvolvimiento económico del país.
6. Comisión de la verdad para el análisis propuesto sobre el Fobaproa. Se trata de investigar a quienes, desde el gobierno, las instituciones y las empresas, realizaron transacciones ilegales, incluyendo el financiamiento de las campañas priístas de 1994.
7. Paz con dignidad en Chiapas y desmilitarización. Cumplir los Acuerdos de San Andrés y aprobar la iniciativa de Ley Indígena elaborada por la COCOPA. Reducción de los efectivos militares en Chiapas, y desmantelamiento de los grupos contrainsurgentes. Nombrar un defensor de los derechos humanos especialmente para Chiapas, el retiro del gobierno del estado del escenario del conflicto, la liberación de los presos políticos y crear un órgano plural e independiente para aplicar los recursos de apoyo social a Chiapas.
8. Reforma electoral nacional y autonomía del tribunal electoral. Revisar el Código Federal de Procesos Electorales para remediar deficiencias. Abrir el derecho al voto a los extranjeros, así como legalizar la figura del referendun, el plebiscito y la iniciativa popular. En el país el Poder Judicial no es independiente. El Tribunal Electoral como parte de la Suprema Corte de Justicia de



la Nación ha declarado improcedentes todas las denuncias presentadas por la oposición, incluidas las de los gastos de campaña, dando siempre la razón al PRI y sus candidatos.

El texto termina sosteniendo la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso que permita mejorar el futuro de nuestra nación. "Queremos un diálogo franco y directo con el Presidente de la República, queremos que el titular del Poder Ejecutivo nos escuche y nosotros lo escucharemos con respeto, queremos discutir y negociar, buscando tejer acuerdos para el avance nacional". Y en el siguiente párrafo termina así: "Hagamos política y empecemos a encauzar las grandes decisiones de la vida nacional; el ajuste al modelo económico, la transición democrática y el Estado de bienestar".

Esto es lo que desde la Secretaría de Gobernación fue considerado difamante, grosero y mentiroso.